

Elecciones y paz local*

Por: Javier Benavides y Camila Carvajal Oquendo**

Si la segunda vuelta presidencial expresó un mandato en favor de los diálogos de La Habana, entonces las elecciones locales y regionales son el punto de partida para pensar en las condiciones y posibilidades que tiene la paz en el nivel local. El presente artículo presenta un panorama de dos zonas que sin duda serán motivo de intervención en una eventual implementación de los acuerdos.

El debate de control político que se hizo en julio en el Congreso de la República en torno al proceso de paz no solo reafirmó su lugar central en la agenda nacional, sino que es síntoma de la inexistencia de valoraciones de peso que desvirtúen el camino de la negociación política. La mesa de La Habana recién se repone de la última crisis y se vigoriza progresivamente bajo la premisa de “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”¹. Ya no es descabellado ser optimista sobre la firma de un acuerdo.

Esta situación hace necesario comenzar a preparar el terreno para la implementación de los acuerdos, sobre todo estableciendo los posibles desafíos que podría enfrentar este proceso en algunos territorios históricamente conflictivos. Pensando en esto, empezemos por dimensionar el desenlace de las elecciones que, pese a no plantear una amenaza inminente para los diálogos, es clave para aterrizar las posibilidades y retos que enfrenta la implementación de los acuerdos. No son lo mismo unos acuerdos que se desarrollen en un entorno institucional favorable al proceso, que otros que su-

cedan en un entorno que pueda vetar —directa o indirectamente— su implementación.

Entre urnas, armas o banderas blancas

Los vaivenes entre la guerra y la paz de nuestra historia reciente, que han significado periodos de confrontación abierta o disonante diálogo con actores armados, han tenido igualmente eco en las jornadas electorales: o bien se traducen en una cruenta historia que combina armas y urnas en relaciones intempestivas, a todas luces trágicas; o, por otra parte, se trata de contextos en los que se usa a *la paz* como “caballito de batalla” de campañas políticas y candidaturas.

“

La región enfrenta en la actualidad varias problemáticas que empiezan a adquirir nuevos ribetes con el avance de los diálogos en La Habana: La situación de orden público, más allá de las FARC, y lo relacionado con el tema agrario.

”

La primera, en varios casos ha implicado situaciones como la eliminación del contradictor político y el adversario electoral, la presión, el sabotaje y el condicionamiento por parte de grupos armados ilegales de todo tipo. Esto ha implicado un incremento comparado de acciones relacionadas con el conflicto en contextos preelectorales y electorales (González, Bolívar, & Vásquez, 2003) con una importante excepción: las presidenciales de 2014, tanto en la primera como en la segunda vuelta, no estuvieron acompañadas por un aumento de las acciones de la guerrilla. Esto podría ser indicio de un cambio en la lectura de las guerrillas en torno al tema².

El segundo fenómeno (la bandera de la paz a “boca de urna”) ha sido otra constante con diferentes expresiones tanto para las jornadas de alcance nacional (presidencia, congreso) como para las territoriales (gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos, etc.). Para las presidenciales del 2014, el discurso de la paz orientó programáticamente las campañas, así, la disyuntiva *guerra o paz* fue una de las matrices centrales que encauzó a la opinión y a los votantes. La del pasado 25 de octubre fue la segunda jornada elec-

toral que “enfrentó” el proceso de paz; y decimos enfrentó, porque a pesar de darse en momentos de una disminución de acciones asociadas al conflicto³, el tema de la paz rondó en discursos, campañas y programas, esta vez, soslayado y conectado a razones, causas, motivos e intereses más relacionados con el nivel local.

Para aterrizar esta discusión, nos situaremos en dos lugares que son una puerta abierta para pensar en las vicisitudes y posibilidades que tiene lo acordado en La Habana en relación con la coyuntura electoral. El Caquetá, lugar donde las FARC han sido un actor armado relevante, donde existe una importantísima organización campesina y comunitaria, y una élite política tradicional; y el Catatumbo, un territorio históricamente disputado por varios de los actores de la confrontación (EPL, FARC, ELN, paramilitares y ahora las denominadas Bacrim), con élites locales menos robustas y una fuerte tradición organizativa del campesinado. Estas zonas, pese a tener algunas similitudes, atraviesan por contextos distintos que significarían diferentes desafíos y requieren de respuestas coherentes frente a dicha realidad.

“

Los miembros de la fuerza pública tienen un régimen de conducta estricto que se regula con el Código Penal Militar, que protege bienes o valores como la disciplina, el servicio, los intereses de la fuerza pública, el honor, entre otros .”

”

El Catatumbo. Desconfianzas y viejas-nuevas formas de hacer política

La región enfrenta en la actualidad varias problemáticas que empiezan a adquirir nuevos ribetes con el avance de los diálogos en La Habana: La situación de orden público, más allá de las FARC (mayor actividad de ELN, EPL y las operaciones contra ‘Megateo’), y lo relacionado con el tema agrario (incumplimiento de acuerdos, ZRC, cultivos ilícitos). Frente a estos puntos, pudimos ubicar las posturas de algunos candidatos de cara al proceso de paz, en donde las clásicas prácticas electorales se mezclan con un clima de desconfianzas múltiples: la de algunos candidatos frente a lo que se negocia en La Habana y sus re-

percusiones en la región, la desconfianza histórica hacia los partidos tradicionales y la de los políticos y elites locales hacia las fuerzas que fuera de estas estructuras se abren campo en la política local.

Los candidatos de un posible veto

Aquellas versiones catastróficas del proceso con asidero en la región se nutren del desconocimiento de los acuerdos y enfatizan en la noción de inseguridad, en el veto a las zonas de reserva campesina y en la estigmatización de aquellas fuerzas políticas ligadas a la organización campesina. En el caso del Catatumbo, es posible hallar la combinación de dos expresiones que se explican por el antecedente de las presidenciales del 2014, en las que el candidato Zuluaga recibió tanto el apoyo de las elites políticas y emergentes cuestionadas —más fieles al expresidente Uribe—, como de la gran mayoría de los conservadores con fuerte arraigo en el departamento e influencia en la región.

Aun así, la fuerza del Centro Democrático es relativamente menor en comparación con otras regiones. Contaron con dos candidatos: en Sardinata, con Yesid



En la historia reciente de Colombia se han expresado en las urnas las tensiones entre la guerra y la paz.



Se espera que quienes ganaron las elecciones el pasado 25 de octubre estén alineados con la paz y que contribuyan a la consolidación del escenario de posacuerdo.

Navas; y en Abrego, con Cristóbal Bonilla —inhabilitado por tener en curso investigaciones judiciales—. Por otra parte, los conservadores con una considerable fuerza en la región, contaron con candidaturas en Abrego, Sardinata, Bucarasi-ca y Tibú. En este último municipio, su candidato, Bernardo Betancurt (aspirante en 2011 por Opción Ciudadana), es actualmente investigado por parapolítica.

Estrategias frente al descrédito de los partidos tradicionales

De igual forma, en varios municipios del Catatumbo, el descrédito de los partidos tradicionales y las instituciones es fuerte, y ello implicó no solamente el surgimientos de experiencias “independientes” y movimientos regionales-locales en las elecciones, sino también de una estrategia de los políticos profesionales por adoptar personerías de partidos pequeños o fuera de los cánones liberal/conservador. Lo ocurrido en El Tarra es un ejemplo ilustrativo al respecto: allí, el candidato Yair Díaz Peñaranda, a pesar de contar con el respaldo de algunas organizaciones campesinas, es un exfuncionario de la administración del alcalde en funciones Jorge Mario Arenas. Con el aval del partido AICO, compitió únicamente con José de Dios Toro, quien en varias ocasiones ha aspirado al cargo y fue avalado en esta oportunidad por la ASI e inscrito a nombre del Polo Democrático.

“ Los niveles de abstención y la victoria del Partido Conservador en esas elecciones serían indicio de la débil confianza que la población deposita en la institucionalidad local. ”

En contraste, otra respuesta frente al descrédito en los partidos tradicionales fue encabezada por experiencias de participación electoral desde aquellas organizaciones —fundamentalmente de origen rural— que obedecen a esa fuerte tradición de movilización y organización campesina en el Catatumbo, con considerables acumulados en el ámbito veredal en municipios como Teorama, Tibú, El Tarra o San Calixto. Estas organizaciones no solo han cargado con el embate paramilitar de los 90 y posterior al 2000, sino con el lastre de la estigmatización por parte del centro y de los actores anteriormente nombrados. Al día de hoy, con las desconfianzas y señalamientos a flor de piel, tras las recientes y más inmediatas jornadas de movilización, participaron desagradadamente —por las reglas de juego electorales y por disputas internas— con candidaturas a concejos y alcaldías por diferentes partidos más allá de la UP y el Polo Democrático.

Precisamente, algo interesante de varias de esas candidaturas, de cara a pensar la paz desde el Catatumbo, fueron las Asambleas Populares desarrolladas en los municipios de San Calixto, El Tarra, Hacarí y Teorema, que reunieron a más de 6.285 personas para elegir y oficializar a sus candidatos a concejos y alcaldías (ejemplo de ello es la candidatura “sometida” a esta dinámica de Guillermo López en Tibú, abogado y candidato por el Polo Democrático). Este proceso, además, estuvo acompañado de consultas, firma de compromisos contra la corrupción y acuerdos sobre mecanismos para garantizar el cumplimiento y desarrollo de los planes de gobierno, no solo desde una visión de veeduría ciudadana —sumamente importante—, sino de propuestas de “cogobierno” con la comunidad y sus representantes (Jerez, 2015). Esto significa el reto de convertir el acumulado de movilización en fuerza electoral y, sin duda, es un insumo para pensar en las instituciones locales de cara a la paz.

El Caquetá: Poderes locales y retos en el posconflicto

Hay mucho de paradójico en una situación naturalizada en las zonas donde el conflicto armado se ha desarrollado con mayor intensidad, coexisten allí la “normalidad” asociada con la presencia de las instituciones democráticas formales, y la “inestabilidad” social, política y económica inherente a las lógicas de la guerra y la violencia estructural. La paradoja radica en que esa coexistencia no configura escenarios de ingobernabilidad, sino que constituye una expresión del desigual proceso de formación del Estado en los lugares donde el poder no ha sido concentrado.

En el Caquetá, históricamente, los comicios electorales han sido la extensión del conflicto en la contienda legal, y no se han desarrollado de forma homogénea en el territorio. La presencia de la guerrilla contrasta con el predominio de una serie de políticos profesionales en el piedemonte y los centros urbanos, que han controlado históricamente la burocracia regional; simultá-



La transformación de las redes clientelares no será inmediata ni automática, y requiere de un real fortalecimiento de la consciencia política de los pobladores en el ejercicio democrático.



neamente, existe una fuerte tradición organizativa campesina en las zonas rurales, muy independiente de la voluntad de ambos poderes, y cuya agencia y autonomía política es innegable (Vásquez, 2014). Estas particularidades dan cuenta de las coexistencias, concertaciones y distancias propias de escenarios como este, en el que las relaciones entre las FARC, la clase política, y los pobladores de la zona han sido muy fluctuantes y complejas.

Elecciones locales, entre polarizaciones y señalamientos

El caso de San Vicente del Caguán permite ilustrar que, si bien fue posible interrumpir la hegemonía liberal gracias a los resultados de los comicios del 2011 (que terminaron en la elección de un alcalde del Polo Democrático), en el municipio existen poderes tradicionales y políticos profesionales cuya voluntad política, en relación con la paz, aparentemente es reservada. En ese escenario podría ser más complejo el proceso de neutralizar a los opositores al proceso de paz y a la implementación de los acuerdos.

Esos “opositores”, asociados generalmente a las coaliciones del Centro Democrático, presentaron candidatura en San Vicente del Caguán como parte de la fórmula de Arnulfo Gasca, político tradicional y aspirante a la Gobernación, quien fue investigado por tener vínculos con el narcotráfico (Unidad Investigativa, 2015) y con otros políticos también investigados por varios delitos. Esta tendencia de los candidatos del Centro Democrático se hace tangible en San Vicente del Caguán en actitudes como la asumida por Humberto Sánchez, cuya estrategia política pasó por desvirtuar a

su contendor del Polo Democrático, afirmando que tenía vínculos con las FARC (“No debe darles”, 2015); esta situación ilustra uno de los puntos más relevantes en el terreno político de la coyuntura, en la medida en que la estigmatización y los señalamientos han sido peligrosamente usados como herramientas para desvirtuar al movimiento campesino y a las comunidades organizadas en las Juntas de Acción Comunal.

Y es que este tipo de sindicaciones no solo pone en riesgo la seguridad de los líderes campesinos, sino que además torpedea sus posibilidades de participar en la política local. No es posible omitir que ambos riesgos han existido en previas coyunturas electorales (basadas en la polarización y determinadas por las lógicas de la guerra) que han terminado, en varios períodos históricos, en el asesinato de candidatos y funcionarios locales (*Verdad Abierta*, 2015, septiembre 10). Si eso continúa sucediendo, la crisis de representatividad puede persistir y consolidar un nicho propicio para la continuación del cacicazgo político, con sus exclusiones y disfuncionalidades inherentes. Vale la pena preguntarse si ese escenario hipotético sería favorable para implementar acuerdos que reivindicar una reforma rural integral, y la consolidación de espacios de participación política para la insurgencia, o si permitiría el fortalecimiento de la institucionalidad local que se requiere en el marco de una transición a la paz.

Adicionalmente, la implementación de los acuerdos tendrá que leerse en clave de un contexto político determinado por la resistencia de las comunidades a las economías extractivas, las reivindicaciones relacionadas con la sostenibilidad de la economía campesina, y la generación de alternativas productivas que permitan mitigar de forma eficaz la producción de cultivos de uso ilícito; eso en un panorama social y político determinado por la corrupción de la clase política, la persistencia de graves necesidades básicas insatisfechas y la baja legitimidad de las instituciones locales. Esos son tan solo algunos de los temas de la agenda de los municipios caquetanos como San Vicente del Caguán, a la

cual tendrán que atender los funcionarios electos.

Por otro lado, las elecciones del año 2011 en Cartagena del Chairá contaron con un alto grado de abstencionismo, derivado del control ejercido por la guerrilla en las zonas rurales y la inconformidad manifestada por la gente ante las prácticas corruptas de los políticos locales (Vásquez, 2014). Dichos niveles de abstención y la victoria del Partido Conservador en esas elecciones serían indicio de la débil confianza que la población deposita en la institucionalidad local, de la efectiva presión ejercida por los actores armados y de la progresiva pérdida de fuerza de la izquierda electoral en el municipio, derivada de una crisis de representatividad generalizada. Estos aspectos podrían determinar un panorama más complejo de cara a la participación política de las FARC, si se tiene en cuenta que esta guerrilla mantiene una agenda política concreta que no fue sustituida por completo, sobre todo en regiones como esta, que ha sido históricamente prioritaria en el ejercicio de su quehacer político.



La transformación de las redes clientelares no será inmediata ni automática, y requiere de un real fortalecimiento de la consciencia política de los pobladores en el ejercicio democrático.




¿Qué nos enseña esta coyuntura en ambos territorios?

Es de vital importancia prestarle atención a los intereses que representan quienes ganaron las elecciones en el entendido que, a pesar de la precariedad institucional que enmarcaría la eventual implementación de los acuerdos, lo que se necesita en principio es que los alcaldes, gobernadores, y demás funcionarios elegidos, estén alineados con la paz y dispuestos a apoyar iniciativas que, precisamente, se espera fortalezcan dicha institucionalidad, y permitan

estabilizar el escenario del posacuerdo. En este sentido, es importante resaltar la importante participación del movimiento campesino en la contienda electoral en ambos casos, que además tuvo lugar en medio del importante posicionamiento que ha tenido la “cuestión agraria” en la agenda de la política nacional de los últimos años, y que tal vez

indirectamente haya sido motivado por el ambiente político del proceso de paz.

Adicionalmente, la transformación de las redes clientelares no será inmediata ni automática, y requiere de un real fortalecimiento de la conciencia política de los pobladores en el ejercicio democrático. En ese sentido, la cultura y las prácticas políticas en el nivel

local importan y hay que considerarlas de cara a los acuerdos de paz, ya que las preferencias de la gente a la hora de votar no solamente se encuentran encaminadas por los discursos nacionales, sino también, son motivadas por intereses más inmediatos. Este será un elemento que tendrán que considerar dentro de sus planes y estrategias, tanto aquellas organizaciones no articuladas a la política tradicional (donde se conoce y se subutilizan estas condiciones), como aquellas resultantes de los acuerdos de paz. 

* Agradecemos a Víctor Barrera por sus comentarios y aportes a este artículo.

** **Javier Benavides y Camila Carvajal Oquendo.**

Investigadores CINEP/ Programa por la Paz. Equipo Violencia y Estado.

Bibliografía

González, F., Bolívar, I., & Vásquez, T. (2003). La Geografía de la guerra. En F. González, I. Bolívar, & T. Vásquez, *Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado* (pp. 115-193). Bogotá: CINEP.

González, F., Guzmán, T., & Barrera, V. (Coord.). (s.f.). *Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia. Elementos para la discusión*. Manuscrito Inédito, CINEP/Programa por la Paz, Bogotá.

Jerez, C. (23 de julio de 2015). Los campesinos del Catatumbo quieren administrar los municipios para lograr la paz. *La Silla de la Paz*. Recuperado de <http://lasillallena.lasillavacia.com/la-silla-de-la-paz/los-campesinos-del-catatumbo-quieren-administrar-los-municipios-para-lograr-la>

No debe darles vergüenza porque tengan familiares en las Farc. (14 de agosto de 2015). *El Líder*. Recuperado de <http://www.ellider.com.co/2015/08/14/no-debe-darles-verguenza-porque-tengan-familiares-en-las-farc/>

Otro candidato cuestionado en Caquetá. (2 de julio de 2015). *La Silla Vacía*. Recuperado de <http://lasillavacia.com/queridodiario/vuelve-y-juega-los-candidatos-en-caqueta-todos-cuestionados-50674>

Unidad Investigativa. (16 de junio de 2015). El dudoso expediente de los candidatos «favoritos» en Caquetá. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/elecciones-2015-el-dudoso-expediente-de-los-candidatos-favoritos-en-caqueta/15954618>

Vásquez, T. (2014). *Caquetá: Análisis de conflictividades y construcción de paz*. Recuperado de <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-caqueta-2014.pdf>

Referencias

- 1 Es claro el desgaste de una de las máximas que guiaron las negociaciones hasta ahora: “lo que sucede en Colombia Sí afecta las conversaciones en la Habana”. Por ende, continuar el proceso en medio del conflicto resulta problemático y poco sostenible en la etapa actual de la Mesa. Insistir en ello, no solo es “tozudo”, sino que el mismo desarrollo de los hechos ha demostrado su incongruencia.
- 2 Tanto la primera como la segunda vuelta estuvieron acompañadas de un descenso considerable en la confrontación. Ello tanto por las treguas unilaterales de las FARC, así como por una capacidad marginal o cierto desinterés del ELN para presionar ambas jornadas electorales.
- 3 Vale recordar que según el Informe reciente presentado por CERAC, agosto de 2015 ha sido el mes menos violento desde 1974.

